

# APOGEO Y DECLINACION DEL MOVIMIENTO SINDICAL BOLIVIANO (1982-1985)

(Una nota sobre la cultura política  
del autoritarismo)

Por H. C. F. MANSILLA

## I

A fines de 1982 el movimiento sindical boliviano se hallaba en la plenitud de su influencia política y en la cumbre de su prestigio social. Los partidos políticos de izquierda, los varios segmentos de la opinión pública progresista y hasta el gobierno de centro-izquierda, que había asumido poco antes el poder (octubre de 1982) atribuían una enorme significación y relevancia a los actos y las declaraciones de la corporación sindical más antigua, combativa y mejor organizada del país, la Central Obrera Boliviana (COB). Los gremios empresariales, los partidos del centro y la derecha y los medios de comunicación afines a estos sectores políticos veían con preocupación creciente las demandas cada vez más radicales y las ansias de poder cada vez más evidentes que provenían de esta institución.

A fines de 1985 los organismos sindicales bolivianos se encontraban en un estado de franco deterioro; su peso en el ámbito político había bajado a niveles sin precedentes y su capacidad de convocatoria dentro de la esfera de izquierdas resultaba seriamente cuestionada. Las huelgas generales y otras medidas similares inspiradas por la COB tuvieron una repercusión limitada en todo campo; ni el nuevo gobierno (agosto de 1985) ni los empresarios se dejaron influir en la formulación de sus políticas por la actuación de la Central Obrera. Su autoridad moral decayó notablemente en el seno de los estratos asalariados y campesinos, y hasta su fuerza numérica sufrió una reducción sin precedentes en varias décadas.

Este proceso de decadencia denota obviamente varias causas. Algunas de

ellas tienen que ver con alteraciones de largo aliento en la economía mundial, que, aunque en menor escala, se dan también en las naciones del Tercer Mundo. El sector secundario de la economía, y sobre todo la industria pesada convencional, pasan por una profunda crisis transformativa, que se ha traducido por una disminución notable de su tamaño absoluto y de su peso relativo dentro de la estructura de producción del país respectivo. Esta evolución conlleva una demanda marcadamente decreciente por insumos minerales y, por ende, una situación claramente desfavorable a la actividad minero-extractiva. El movimiento sindical, organizado en casi todo el mundo tradicionalmente en torno a esos sectores productivos, fue afectado de lleno por aquella crisis y perdió adherentes, fuerza de negociación y ascendiente sociopolítico en la población.

Este desarrollo, que se dio de lleno en Bolivia, fue acompañado por una dilatación del sector terciario, por una expansión sin precedente de la economía informal (incluyendo sus segmentos delictivos), por el surgimiento de los nuevos movimientos sociales y por el renacimiento de tendencias indigenistas y regionalistas, es decir, por factores evolutivos que no estaban previstos de ninguna manera por las ideologías revolucionarias de corte marxista que han prevalecido en la jefatura del movimiento sindical boliviano. Aun cuando importantes grupos del mismo se hayan declarado partidarios de un difuso nacionalismo revolucionario, la visión general del mundo, y principalmente la concepción subyacente del desarrollo histórico, han estado determinadas por aquella versión del marxismo, tan frecuente en las periferias mundiales, que combina un optimismo acrítico en torno a las metas de la evolución de las naciones con una retórica radical y una falta de sentido de las proporciones en la praxis cotidiana. Los dirigentes sindicales han seguido apegados a este credo revolucionario a pesar de la decadencia generalizada del marxismo y de la pérdida de su poder explicativo frente a los cambios sociales recién mencionados porque esta doctrina se había convertido en un fundamento irrenunciable de su identidad como clase social y como ente corporativo. Se trata, en el fondo, del mismo proceso sufrido por otra variante de esta corriente ideológica, la *Teoría de la Dependencia*: el naufragio en el campo académico e intelectual no impide que estas concepciones, tan caras a los anhelos del preconsciente colectivo, se transformen en pilares centrales del pensamiento de las masas politizadas superficialmente y de la cultura popular contemporánea (1). El predominio de estas ideologías, proclives a una radicalización de

(1) Cfr. un ejemplo de ese marxismo poco crítico aplicado a la temática aquí tratada: GUSTAVO RODRÍGUEZ/CARLOS BÖHRT: *Bolivia: el movimiento sindical y la crisis*, en CARLOS F. TORANZO ROCA (comp.), *Crisis del sindicalismo en Bolivia*, La Paz, Flacso/Ceres, 1987, págs. 17-43.

corte irracionalista, ha impedido al movimiento sindical percibir y digerir adecuadamente las modificaciones que se dan actualmente en la economía y en la sociedad, favoreciendo así, paradójicamente, los intereses de las clases dominantes, las cuales tienen que esforzarse menos en contrarrestar los proyectos políticos y las demandas salariales de las organizaciones sindicales a causa de su carácter ahora obsoleto.

## II

El transcurso del apogeo a la declinación en el lapso tan breve de tres años no puede ser explicado adecuadamente sólo por medio de referencias al florecimiento de la economía informal, a la aparición de nuevos movimientos sociales, incluyendo a los regionalistas e indigenistas, o a cambios originados en el mercado mundial, aunque, por otra parte, ninguno de estos factores causales puede faltar en un análisis global. En el restringido marco del presente artículo me limitaré a mencionar aquellos elementos pertenecientes a la ideología política, a la visión del mundo y a las pautas normativas de comportamiento que conforman una parte sustancial de la identidad de la Central Obrera Boliviana, y que son, en gran medida, responsables por la actuación autodestructiva e irracional de esta institución durante el período 1982-1985. Se trata ciertamente de un enfoque parcial, que no pretende esclarecer exhaustivamente esta problemática, sino complementar esquemas explicativos centrados en los aspectos socioeconómicos ya nombrados.

La cultura cívica del área andina, en su versión más tradicional, ha permeado los valores y los paradigmas profundos del movimiento sindical de un modo más persistente que en el caso del empresariado privado. Mientras éste ha modernizado sus principios rectores y sus pautas de comportamiento, los sindicatos han preservado la antigua cultura política, en lo cual se asemejan al camino seguido por los partidos populistas y de izquierdas. La llamada «Revolución Nacional» de 1952 significó en Bolivia un paso cualitativo en el proceso de modernización al incorporar, aunque sea rudimentariamente, las masas campesinas a la vida social y al ensanchar decisivamente las oportunidades de participación política y cultural de los estratos medios. Otra alteración comparable se ha dado a partir de 1985, cuando se agotaron el modelo estatalista y el sistema dicotómico de lucha de clases entre sólo dos contendientes irreconciliables. Los modos colectivos de percepción social, especialmente aquellos vigentes en el movimiento sindical y en los partidos populistas y revolucionarios, han permanecido, sin embargo, inalterados desde hace muchas décadas y se siguen identificando con antagonismos y consignas

que hoy ya pueden ser calificadas de anacrónicas. Este conjunto de actitudes, robustecido por un talante anticosmopolita, inflexible y dogmático, impide que estos partidos y los sindicatos puedan servir como instrumentos de articulación a los intereses de nuevos e importantes sectores sociopolíticos que han brotado en la Bolivia contemporánea (2).

En sus manifestaciones programáticas (y en las que se autodefine), en su praxis política efectiva y en su interacción con otros partidos y grupos, el movimiento sindical ha hecho gala de una simbiosis enrevesada de radicalismo ideológico y autoritarismo convencional, es decir, de una curiosa, pero nada rara combinación entre un marxismo revolucionario y los resabios de la herencia hispano-católica, la que, a su vez, preserva vestigios de tradiciones culturales anteriores, como la incaica y la islámica. Esta mixtura es evidentemente favorable a una sólida identidad colectiva, pero no es proclive ni al pluralismo de ideas y partidos, ni a soluciones negociadas entre actores más o menos equivalentes, ni a la democracia parlamentaria, sino más bien a posiciones maximalistas en toda discusión, a proclamar posturas y alternativas inviables de carácter radical-revolucionario y a percibir conflictos en forma simplista como luchas sin merced en un juego de suma cero, donde sólo puede haber un ganador total frente a un perdedor absoluto. El potencial antidemocrático que se deriva de esta situación liminar se trasluce en la regla práctica que iguala negociación a imposición: la única concertación admisible sería la aceptación de todas las condiciones que uno mismo dicta a un enemigo básicamente derrotado (3).

La democracia que, en el fondo, propugna la COB no tiene mucho en común con la versión occidental de una democracia pluralista, parlamentaria y representativa ni con un quehacer político racional, transparente y participativo. La implementación efectiva de los postulados políticos de esta institución significaría que la clase gubernamental de un momento dado sería reemplazada como elite del poder por la cúpula dirigente del movimiento

(2) Cfr. el importante artículo de SALVADOR ROMERO PITTARI: *Cultura política y concertación social*, en RENÉ ANTONIO MOYORGA (comp.), *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*, La Paz, Clacso/Ceres, 1987, pág. 165. Al estudiar los fenómenos de la cultura política, ROMERO PITTARI señaló los peligros de un paradigma explicativo de corte *hiperculturalista*, el cual ve en toda acción sólo los resultados de las pautas culturales prevalecientes en el marco de referencia, sin considerar que los actores sociales también poseen intencionalidades y preferencias propias (*ibidem*, pág. 162).

(3) Para la comprensión de esta temática es fundamental el ensayo de RENÉ ANTONIO MOYORGA: *La democracia entre la fragmentación y la imposición*, en MOYORGA (comp.), págs. 17-90, especialmente pág. 76; cfr. también MOYORGA: *Movimientos sociales y sistema político: la crisis del sistema democrático y la Central Obrera Boliviana*, en ROBERTO LASERNA (comp.), *Crisis, democracia y conflicto social*, Cochabamba, Ceres, 1985, págs. 25-64.

sindical, y esto sin perspectivas de un cambio posterior de gobierno mediante elecciones y ni siquiera de una rotación oligárquica de elites. Desde su constitución en 1952, la COB se ha caracterizado por una actitud hacia la democracia que sólo con benevolencia puede ser calificada de ambigua: si hubo alguna mención positiva hacia procedimientos y órganos de la democracia representativa, fue porque mediante ello se esperaba alcanzar algún fin político inmediato. Creo que se puede aseverar con cierta seguridad que no existe ningún testimonio proveniente de la COB favorable a la independencia del Poder Judicial, a la autonomía del Legislativo, a la racionalización de la Administración Pública, a la reducción del fenómeno burocrático, a la limitación de las postestades discrecionales del presidente de la República o al establecimiento de autogobiernos regionales y municipales. La corrupción en todas las instancias estatales, la hipertrofia de organismos, procedimientos y prácticas burocráticas, los peligros originados en la crisis ecológica y la excesiva centralización de todos los procesos decisivos políticos conforman temáticas que nunca han preocupado a la jefatura sindical.

En la praxis cotidiana, su concepción de democracia se limita a reproducir la pauta prevaleciente en los partidos y grupos de la izquierda radical boliviana: el sistema parlamentario y representativo es considerado como una forma encubierta de la «dictadura burguesa», carente de todo elemento que pueda enriquecer la vida político-institucional de los sindicatos, y la concertación social es percibida como un mecanismo engañoso destinado a subordinar y controlar el movimiento obrero en favor de las «clases dominantes». Se trata, como escribe René Antonio Mayorga (4), de una lógica *militar* que permea exitosamente todas las categorías del pensamiento y la acción de la COB, y que representa una parte esencial de la cultura política tradicional del área andina. Una actuación basada en compromisos, en negociaciones sobre objetivos precisos y claramente delimitados, en convergencias temporales y pragmáticas y en el respeto de los intereses de los otros actores sociales, es percibida como una traición a la misión sacrosanta del sindicalismo organizado, que es la liberación total del proletariado, la cual se confunde *per definitionem* con la liberación de toda la nación.

La lógica militar que los sindicatos han exhibido en la esfera política proviene, aparte de la herencia ibero-católica y de la influencia del marxismo tercermundista, de insurrecciones populares contra gobiernos dictatoriales que estuvieron acaudillados por la COB. Durante largos años (antes de 1952 y

---

(4) RENÉ ANTONIO MAYORGA: *Movimientos sociales...*, op. cit. en nota 3, págs. 59 y sig.; MAYORGA: *La Central Obrera Boliviana: paradoja del sistema democrático*, La Paz, Ceres, 1986, pág. 17; MAYORGA: *Crisis de Estado y democracia*, en MAYORGA (comp.), op. cit. en nota 2, págs. 129-159.

en los períodos 1964-1969, 1971-1978, 1980-1982) los sindicatos mineros y luego la COB lucharon con cierto éxito y con admirable tenacidad por el restablecimiento de las libertades esenciales (5); en esta contienda el adversario principal del sindicalismo fue el ejército, instrumento irrenunciable para implementar políticas públicas que vulneraban intereses obreros. Con esta contribución vital de las organizaciones sindicales se logró recuperar (en 1969, en 1978 y sobre todo a partir de 1982) el Estado de Derecho y un amplio espacio para la articulación de las demandas más diversas. La COB prosiguió, sin embargo, con la ya mencionada lógica que supone que todo proceso político es una confrontación de antagonismos irreductibles; en lugar del reconocimiento recíproco de los sujetos políticos con derechos más o menos equivalentes y fundamentalmente legítimos, la COB mantuvo su visión maniqueísta de lo político, que oscila entre los extremos de un conflicto violento y de un consenso nivelador (6). El espacio democrático conseguido a partir de 1982 fue visto por la COB como una posibilidad para la toma del poder por ella misma (en conjunción con las fuerzas de izquierda); los sindicatos rechazaron las elecciones generales celebradas en 1985 por ser éstas un mero recurso formal que favorece a los enemigos de clase (7). En lugar de ampliar aquel espacio político en favor de una moderna democracia pluralista, la COB trató de usarlo como un medio y una ocasión para instaurar la verdadera democracia directa de masas (o la dictadura del proletariado, según la fracción predominante en un momento dado en el seno de la dirigencia sindical), menospreciando la necesaria consolidación de un marco institucional con reglas de juego más o menos duraderas y claras para la resolución concertada de conflictos y para el acceso ordenado al poder. La COB creyó así permanecer fiel a sus «objetivos de clase» y a su tradición socialista y radical, y lo que consiguió en realidad fue el quedarse fuera del nuevo modelo sociopolítico surgido de las elecciones generales de 1985, en las cuales los partidos de izquierda sufrieron una derrota histórica. La visión maniqueísta de los procesos sociales y la propensión a concebir la democracia representativa como una mera democracia «burguesa» o «formal» impidieron al movimiento sindical y a las fuerzas inspiradas por ideologías socialistas percatarse de que gran parte del electorado estaba cansado del fracaso de la economía estatal,

---

(5) Para la historia de la Central Obrera Boliviana y temas afines, cfr. la obra en varios tomos de GUILLERMO LORA: *Historia del movimiento obrero boliviano*, La Paz, Amigos del Libro, 1967-1980. Como visión crítica de conjunto, es fundamental la obra de JORGE LAZARTE: *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. Historia de la COB, 1952-1987*, La Paz, Ildis/Edobol, 1989 (sobre la fundación, págs. 3 y sigs.; sobre el cogobierno, págs. 121 y sigs.).

(6) Cfr. RENÉ ANTONIO MAYORGA: *Movimientos sociales...*, op. cit. en nota 3, pág. 60.

(7) Para los detalles y las fuentes pertinentes a esta temática, cfr. los acápites IV y V.

de la indisciplina laboral y del radicalismo político y que, simultáneamente, tomaba en serio los proyectos de democratización que se expandieron exitosamente por muchos países de América Latina.

### III

Desde su fundación al calor de la revolución triunfante en 1952, la COB se entiende a sí misma no sólo como la representación y articulación de los intereses gremiales de los asalariados, sino también —y en primera línea— como un sujeto político de importancia central en la vida de la nación. Su participación en el gobierno y en la administración de las grandes empresas estatales creadas o ampliadas a partir de 1952 sirvió ciertamente para fomentar ese rol político que pronto conformó la parte más sólida de la identidad corporativa de la COB. A la caída del nacionalismo revolucionario en 1964, la COB se consideró como el bastión más fuerte de la lucha popular contra los regímenes militares que, con algunas interrupciones, duraron hasta 1982. A ello contribuyó el hecho de que los sindicatos campesinos, las representaciones gremiales de empleados públicos, profesionales y maestros de escuela, los asalariados de la banca, el comercio y el transporte y hasta los llamados trabajadores de clase media (por ejemplo, los periodistas) se hayan afiliado a la COB y hayan reconocido tácitamente el papel rector que desde un comienzo se arrogó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), agrupación caracterizada por el alto grado de agregación corporativa, por el número elevado de sus miembros inscritos y por la radicalidad de sus planteamientos político-ideológicos. Esa función dirigente les fue reconocida a los mineros debido a la relevancia que hasta hace poco ha tenido la actividad minera en Bolivia, aunque el número efectivo de trabajadores en este rubro nunca llegó a constituir más del 4 por 100 de la población económicamente activa (8) (y eso en los mejores tiempos de la minería). Este curioso argumento de la «centralidad» de los sindicatos mineros tenía su contraparte en la inclinación de los propietarios de las grandes minas a ejercer una influencia notable sobre el curso de los asuntos públicos a causa de su sobresaliente actividad económica.

Desde un principio la COB permitió en su seno diversas opciones ideológicas (populistas, anarcosindicalistas, marxistas, nacionalistas de izquierda).

---

(8) JORGE LAZARTE: *Crisis de identidad y centralidad minera*, en *Repensando el país*, La Paz, Movimiento Bolivia Libre, 1987, pág. 159. Cfr. también LAZARTE: *El movimiento obrero: crisis y opción de futuro de la COB*, en CARLOS F. TORANZO ROCA (comp.), *op. cit.* en nota 1, págs. 251-191.

Esta heterogeneidad de orientaciones ha sido neutralizada por una cierta preponderancia de un marxismo radicalizado tercermundista, pero deja entrever hasta hoy «dos códigos discursivos» (9): la concepción de los consejos obreros con dilatadas competencias de todo tipo (incluyendo las de carácter legislativo y judicial), que debe desembocar en una democracia directa de los productores, y la tradicional lógica del partido-vanguardia, basada en la teoría leninista del partido como encarnación de la razón histórica. Mientras la primera tiende a una determinada reducción de las funciones del Estado y de la burocracia, potenciando algunos organismos de autogobierno de la sociedad civil, la segunda lleva a un robustecimiento del Estado centralizador y a un debilitamiento de las instancias autónomas. Ambas concepciones denotan, sin embargo, una misma disposición francamente positiva con respecto a la centralidad de los sindicatos mineros (lo que significa *in praxi* un favorecimiento de la representación minera y una clara desventaja para la campesina (10) dentro de la central sindical) y un mismo rechazo de la democracia representativa.

La variedad de corrientes político-ideológicas, la esterilidad del marxismo como sistema para comprender el mundo (tanto en su versión ortodoxa pro moscovita como en sus extravagantes tendencias trotskistas), la heterogeneidad de intereses gremiales representados y la desigualdad de los mismos en el proceso interno de formulación de estrategias políticas constituyen factores importantes que desde su fundación han impedido a la COB proyectar e implementar un modelo de transformación socioeconómica realista, adecuado al nivel de desarrollo boliviano y articulado en planes de contenido concreto. A pesar de haber sido durante décadas uno de los protagonistas más activos de la escena política, la COB no logró elaborar un discurso que fuese aceptado por todo el llamado bloque popular ni un programa que fuera reconocido como obligatorio por los partidos de izquierda.

Entendiéndose a sí misma como *el sujeto histórico-político* de las «clases explotadas» bolivianas, la COB se declaró desde 1970 partidaria del establecimiento inmediato de un ordenamiento económico e institucional de carácter

(9) RENÉ ANTONIO MAYORGA: *La Central...*, op. cit. en nota 4, pág. 14.

(10) Al Quinto Congreso de la COB (1-8 de mayo de 1979) asistieron, por ejemplo, 563 delegados, de los cuales sólo 72 provenían del campo (7 de ellos no pertenecían al campesinado); el llamado bloque proletario sumaba 288 delegados (de ellos 115 mineros). Un número considerable de representantes regionales y departamentales pertenece indirectamente a los sindicatos mineros. Estas relaciones de representación proporcional valen también para los llamados Ampliados Nacionales (reuniones entre congresos) y están establecidos por el Estatuto de la COB aprobado por ese mismo congreso. Cfr. *Documentos y resoluciones del V Congreso de la Central Obrera Boliviana*, La Paz, Ediciones Rebelión, 1979, págs. 6 y 9. Sobre la estructura interna de la COB, cfr. LAZARTE: *Movimiento...*, op. cit. en nota 5, págs. 181 y sigs.

socialista radical, sin dejar, por otra parte, de preocuparse por cuestiones salariales y gremiales, propias de la vida cotidiana de los sindicatos. Lo que nunca ha existido es un vínculo adecuado entre los problemas de cada día, las experiencias políticas en la empresa y en el municipio, las tareas específicas de los partidos de izquierda y los fines últimos propugnados por la COB. El postulado del socialismo como meta al alcance de la mano —núcleo de la llamada *tesis política* de la COB— aparece como un manto amplio en su alcance y abstracto en su contenido que ha servido para encubrir la diversidad ideológica en el seno de la COB y la variedad de los intereses de grupo representados en ella. El socialismo como designio normativo no ha brotado ciertamente de un análisis desapasionado de una realidad concreta y no ha sido pensado como la construcción de una alternativa a partir de los hechos y las posibilidades de la sociedad real, sino que ha sido adoptado como aplicación local de una lógica histórica de pretendida validez universal (y, por consiguiente, fuera de toda discusión y duda). «En semejante estado de abstracción, y sin las mediaciones correspondientes, con una realidad impenetrable a las fórmulas simples, el socialismo de la Tesis Política de la COB mantiene su carácter de utopía en el sentido estricto del término: es un proyecto que no posee un lugar preciso, está desubicado respecto a la realidad histórica concreta, carece de lugar y de posibilidades de realización» (11).

La incapacidad del movimiento sindical para comprender los profundos cambios socioeconómicos contemporáneos y para diseñar un proyecto coherente de acuerdo a esas modificaciones está íntimamente relacionada con esa creencia en la inmediatez del futuro socialista, la cual hace superfluo un análisis creativo de todo detalle engorroso de la realidad, máxime si estos pormenores parecen desviarse de las grandes líneas y rutas canonizadas en los manuales. Las variantes moscovita y trotskista del marxismo boliviano se han limitado a la aplicación de esos esquemas universalistas, y el resultado ha sido la producción de ideas imitativas, ritualizadas e irreales, la cual, cuando traspasa cierta frontera impuesta por la paciencia de los miembros de base, conduce a que los partidarios y las masas desilusionadas se busquen otros órganos de representación política y sindical. Esta combinación de esperanzas quiliásticas con ineptitud para el análisis crítico y aferramiento a esquemas santificados por los clásicos (y por la administración sucesoria) reproduce, bajo un barniz progresista, elementos fundamentales de la cultura política del autoritarismo.

(11) RENÉ ANTONIO MAYORGA: *La Central...*, op. cit. en nota 4, pág. 13. En torno a la relación entre sectores obreros y campesinos en el interior de la COB cfr. SILVIA RIVERA CUSICANQUI: *El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática*, en ROBERTO LASERNA (comp.), op. cit. en nota 3, págs. 129-164, espec. pág. 157.

En el período aquí tratado (1982-1985) se dio un recrudescimiento de estos rasgos característicos de la COB, lo que probablemente aceleró su declinación. Es interesante referirse en este contexto al testimonio de un destacado dirigente de esa institución, testimonio que refleja las concepciones teórico-políticas entonces imperantes en la jefatura de la COB. Filemón Escobar parte *a priori* de la suposición de que los sindicatos no son organismos para la defensa de intereses gremiales, sino «órganos de poder», cuya función sería el diseñar «las reglas de juego» y «la política social, cultural, económica y gubernamental para toda la nación» (12). Ocurre así que una central sindical que reúne sólo a una parte reducida de la población económicamente activa del país se atribuye, a causa de un mandato histórico inapelable, la representación de la nación en su totalidad. Concomitantemente, la COB es calificada de «única alternativa de poder popular» (13) y de «instrumento que conduzca los destinos de Bolivia» (14), cuya originalidad en cuanto estructura organizativa de gran envergadura se agota muy pronto en la recomendación del modelo leninista como única forma aceptable de partido progresista (15).

La pretensión de encarnar la verdad y la razón históricas y la voluntad de encajar este designio en una concepción de partido básicamente dictatorial y desacreditada por los sucesos del siglo XX, no conforman, evidentemente, factores que contribuyan a dar reputación de espíritu democrático, abierto y moderno al movimiento sindical boliviano. Según el mismo autor, los períodos democráticos y con vigencia del Estado de Derecho nunca se transforman en procesos genuinamente democráticos a largo plazo (16); las coyunturas democráticas son exclusivamente pausas para desarrollar «las condiciones necesarias para la acción revolucionaria» y «el lugar de la posibilidad de la insurrección» (17). Ya que el papel histórico de las organizaciones sindicales consistiría en la preparación para la lucha revolucionaria (18), la coyuntura democrática no puede ser otra cosa que «una tregua [...] en ese intersticio» donde «ambos contendientes libran la batalla para dar paso a una opción socialista

---

(12) FILEMÓN ESCOBAR: *Testimonio de un militante obrero* (compilado e introducido por JAVIER MEDINA), La Paz, Hisbol, 1984, págs. 267 y sig. (subrayado en el original).

(13) *Ibidem*, págs. 263 y 274 (énfasis en el original). Simultáneamente, Escobar describe a la COB como «única alternativa de poder nacional» (*ibidem*, págs. 274 y 280).

(14) *Ibidem*, pág. 283 (subrayado en el original).

(15) *Ibidem*, págs. 137 y sigs.

(16) *Ibidem*, pág. 235.

(17) *Ibidem*, págs. 239 y sig. y 244.

(18) «Nuestro» papel histórico es «prepararnos para la insurrección» (*ibidem*, pág. 249, énfasis en el original).

o a un retorno a la dictadura militar» (19). El idioma revela la índole esencialmente bélica del pensamiento político de la COB, complementada por la visión maniqueísta que acepta sólo dos guerreros en pugna: el uno representando las fuerzas luminosas del futuro y el otro personificando las facciones tenebrosas del pasado. La cultura política del autoritarismo se manifiesta aquí en su configuración más tradicional y arcaica.

Para el análisis de la involucración política del sindicalismo boliviano, el período de la llamada Unidad Democrática y Popular (octubre de 1982-agosto de 1985) es particularmente interesante porque esta etapa, de un gobierno de centro-izquierda, empezó con la marea ascendente del sindicalismo politizado y terminó con su total derrota antes de que el nuevo gobierno de centro-derecha (a partir de agosto de 1985) aplicase su nueva política económica de carácter neoliberal y redujera considerablemente el número de asalariados en las empresas estatales y en primer lugar en la minería.

En retrospectiva se puede afirmar que la COB no estaba preparada para actuar en un marco de referencia genuinamente democrático, pluralista competitivo (tanto en partidos como en ideas); sus enfoques teóricos y su estrategia práctica estaban prefijados por los largos años de la lucha contra las dictaduras militares y se tradujeron en una política de confrontación con el gobierno de turno. Por otra parte, la COB mantuvo sin modificación alguna sus designios de cambios sociales radicales y supuso que la «tregua» brindada por la coyuntura democrática sería una buena oportunidad para llevar a la praxis estos proyectos de índole bastante totalitaria y quiliástica. En el interior de la mejor tradición cultural autoritaria, la dirigencia sindical creyó que el éxito político dimanaba de actitudes impositivas, severas y refractarias a todo compromiso, y, por consiguiente, se consagró a una política que no tomaba en consideración a otros partidos, grupos de presión, intereses sectoriales y movimientos sociales, cuyas aspiraciones y cuyos propósitos eran obviamente tan legítimos como los de la central sindical.

Este período 1982-1985 ha ingresado en la crónica histórica boliviana como el de mayor número de huelgas, paros, emergencias, suspensión imprevista de labores, disminución de la productividad, ocupación de empresas e instituciones, etc., y, simultáneamente, como el de mayor actividad política

---

(19) *Ibidem*, pág. 235. Cfr. también FILEMÓN ESCOBAR: *La experiencia histórica de la participación obrera a partir de la revolución de 1952*, en RENÉ ANTONIO MAYORGA (comp.), *op. cit.* en nota 2, págs. 117-126; F. ESCOBAR: *El destino de la coyuntura democrática será también el destino de la clase obrera y de la nación*, La Paz, s.e., 1984 (manifiesto al VI Congreso de la COB, donde el autor expone sucintamente sus tesis acerca de la COB como «única alternativa de poder aceptada por la nación» y en torno a los sindicatos como «los órganos naturales del poder popular») (*ibidem*, pág. 1).

y propagandística de los sindicatos (20). La agravación de una ya muy dura crisis económica (probablemente la peor en toda la historia del país) y el endurecimiento del clima político fueron percibidos por la opinión pública como procesos por los cuales la COB tenía una responsabilidad directa, aunque, obviamente, en grado parcial. De todas maneras, esta visión fue pernicioso para la COB, ya que numerosos sectores de la población vieron en ella —con o sin razón— la causa del empeoramiento de sus condiciones de vida. Mediante sus reclamaciones salariales de carácter irrealista, su socavamiento de la ética laboral y sus pretensiones de suplantar a los partidos y a las instituciones políticas, la COB realizó un generoso aporte a la descomposición moral, a la fragmentación política y a la postración económica que han afectado al país. El fenómeno de la incomunicación colectiva, al cual también coadyuvó el movimiento sindical, ha quedado como corolario de una estrategia fallida para la conquista del poder durante la etapa en cuestión. La dirección de la COB supuso que el descrédito general y las divisiones internas de las Fuerzas Armadas (después del fracaso de las dictaduras militares asociadas al tráfico de drogas, 1980-1982), la parálisis del gobierno debido a la heterogeneidad de la coalición de centro-izquierda y la incapacidad del Parlamento constituían factores que fortalecían la posición propia y que hubiese permitido alcanzar el control sobre los mecanismos decisivos más importantes del Estado (21).

En marzo de 1983 los sindicatos exigieron del gobierno la inmediata implantación de la *cogestión* en el sector minero estatal (22), empezando por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y terminando en la empresa más pequeña del rubro. Se trataba, según ellos, de «consolidar el derecho de los trabajadores mineros a intervenir mayoritariamente [...] en la conducción, administración, producción y control de todas las empresas y oficinas que

---

(20) Sobre la política sindical en este período, cfr. RICARDO CALLA ORTEGA: *La encrucijada de la COB: temas del movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática*, en ROBERTO LASERNA (comp.), *op. cit.* en nota 3, págs. 65-128; JORGE LAZARTE: *Cogestión y participación: ideología y práctica del movimiento obrero*, en RENÉ ANTONIO MAYORGA (comp.), *op. cit.* en nota 2, págs. 205-242.

(21) Cfr. RENÉ ANTONIO MAYORGA: *Movimientos sociales...*, *op. cit.* en nota 3, pág. 52; MAYORGA: *Crisis de Estado...*, *op. cit.* en nota 4, págs. 129 y sig. Entre las fuentes primarias, cfr. *Tres años de lucha sindical, 1981-1984*, La Paz, Centro de Promoción Minera, 1984, documento 9, págs. 47-50.

(22) Sobre la cogestión, cfr. YVON LE BOT: «L'expérience de cogestion à majorité ouvrière en Bolivie (1983-1984) entre l'utopie ouvrière et le déclin du secteur minier», en *Problemes d'Amérique Latine*, núm. 73, julio-sept. 1984, págs. 112 y sigs.; JORGE LAZARTE: *Cogestión...*, *op. cit.* en nota 20, págs. 222 y sigs.

integran COMIBOL» (23); la cogestión mayoritaria incluía «el salario mínimo vital con escala móvil» y el derecho de influir sobre la designación del gerente general de COMIBOL. Muy pronto la central sindical amplió sus demandas a una «cogestión obrera mayoritaria en todo el sector nacionalizado de la economía», a una «participación preponderante de los trabajadores en los centros de decisión del poder político», a un «control obrero» en el sector productivo privado y «ante el vacío de poder» y «para garantizar la sobrevivencia de la democracia» —en la cual la COB, por otra parte, no creía— a una coparticipación en el proceso de las más altas decisiones políticas (24). La evolución posterior de la cogestión obrera estuvo inextricablemente vinculada a la promulgación de medidas de ajuste económico-financieras de parte del gobierno, a las cuales el movimiento sindical siempre se opuso, y a la pérdida progresiva de autoridad de la coalición gobernante, la cual se debatía desde enero de 1983 en una crisis ministerial y conceptual permanente. El discurso ambiguo y la ideología verbalmente revolucionaria que provenía de algunas fuentes gubernamentales (25) contribuyeron a fortalecer la convicción de la COB de que ella estaba muy cerca de «dictar las reglas del juego» y transformarse definitivamente en un «órgano de poder». En un documento programático, la COB no sólo exigió la cogestión en la minería estatizada, sino que demandó la «coparticipación preponderante» de los trabajadores en los centros de decisión política, la estatización inmediata del sistema bancario y financiero, la recusación de todas las medidas de ajuste económico-financieras (presuntamente impuestas por el Fondo Monetario Internacional) y de la mayoría de los contratos estatales firmados con empresas extranjeras (26). Simultáneamente, la federación de sindicatos mineros procedió a la ocupación pacífica de todas las instalaciones y oficinas de la COMIBOL, a nombrar nuevos planteles directivos y a imponer su régimen interno en la totalidad de la minería estatizada (27).

(23) «Ante graves crisis económica y política FSTMB plantea cogestión desde minas hasta cúpula de COMIBOL», en *Presencia* (La Paz) del 3 de marzo de 1983, pág. 9; «FSTMB preparó el reglamento y método de la cogestión obrera», en *Presencia* del 4 de marzo de 1983, pág. 8.

(24) «La COB pide participación en toma de decisiones políticas», en *Presencia* del 6 de abril de 1983, págs. 1 y 13; «Juan Lechín: "No sería la primera vez que la COB cogobierne en el país"», *Presencia* del 12 de abril de 1983, pág. 9.

(25) Funcionarios gubernamentales desahuciaban «el proyecto burgués de desarrollo», propiciaban la transición de la «dictadura burguesa» a la «dictadura proletaria» y exigían el «control obrero» también en el sector privado de la economía. Cfr. *Ipe* (La Paz) del 25 de abril de 1983, vol. XXI, núm. 998, pág. 62.

(26) «COB plantea reorientación política para potenciar proceso democrático», en *Presencia* del 16 de abril de 1983, págs. 1 y 13.

(27) «La Federación de Mineros asume control de la minería estatal», en *Presencia* del 20 de abril de 1983, pág. 1. Cfr. LAZARTE: *Cogestión...*, op. cit. en nota 20, págs. 222 y sig.

La respuesta del gobierno fue, hasta la finalización de la presidencia de Hernán Siles Zuazo en agosto de 1985, de una ambigüedad completa. El motivo era el de ganar tiempo: no existía ningún plan para afrontar esta crisis y ninguna unidad dentro de la heterogénea coalición de centro-izquierda. El gobierno se opuso categóricamente a la cogestión obrera en las empresas privadas y aseveró que no aceptaba la ocupación ilegal de las mismas, pero, al mismo tiempo, dejó la puerta abierta a ciertos tipos de cogestión obrera y coparticipación sindical en las labores gubernamentales y no tomó ninguna medida policial ni jurídica contra la toma de los centros mineros (28). Probablemente el gobierno estaba contento de que los obreros hubiesen tomado a su cargo una corporación estatal que sólo generaba grandes pérdidas, pero no lo podía admitir abiertamente. Después de un juego de tira y afloja, durante el cual el gobierno propuso un modelo de cogestión paritaria en la minería estatizada, se llegó a un compromiso provisional (es decir, casi permanente): se estableció en la COMIBOL un directorio cogestionario *de iure* paritario y *de facto* mayoritariamente en manos de representantes sindicales (29). En lo referente a producción y productividad, rentabilidad empresarial, ética en el manejo financiero y política de empleo, las minas estatales continuaron su carrera descendente, y al final del período (agosto de 1985) la situación de COMIBOL era la peor de su historia (30).

La cogestión mayoritaria abrió el apetito de poder de la central sindical. En una atmósfera de huelgas, amenazas y emergencias, agravada por la inflación galopante, el declinamiento del aparato productivo del país y un notable florecimiento de la corrupción burocrático-administrativa, la dirigencia sindical exigió una «participación preponderante» para la COB en el gobierno, además de la extensión de la cogestión mayoritaria a todas las empresas estatales, la instauración del control obrero en la industria privada, el establecimiento del control gubernamental sobre todo el sistema bancario-financiero y la apertura de una investigación en torno a los grandes patrimonios privados. Por otra parte, la central sindical expuso este su «Plan de emergencia» junto con un gesto amenazador: o el gobierno aceptaba el plan y la coparticipación preponderante de la COB o el país se sometía a los dictados

---

(28) «Gobierno no reconoce a nueva administración de la COMIBOL», en *Presencia* del 22 de abril de 1983, pág. 1; «Mensaje presidencial: la ocupación de COMIBOL es ilegal y afecta a la estabilidad democrática», en *Presencia* del 23 de abril de 1983, págs. 1 y 13.

(29) «El Gobierno dispuso cogestión paritaria provisional en COMIBOL», en *Presencia* del 16 de mayo de 1983, pág. 1; «Ministro de Minería: La cogestión es un fenómeno inédito en el Tercer Mundo», en *Presencia* del 25 de mayo de 1983, pág. 1.

(30) Cfr. JORGE LAZARTE: *Cogestión...*, op. cit. en nota 20, págs. 230-232 y 240-242; sobre la declinación general de la COB cfr. LAZARTE: *Movimiento...*, op. cit. en nota 5, págs. 251 y sigs.

del Fondo Monetario Internacional (31). No se trataba de una estrategia coherente frente a los graves problemas del país, sino de una declaración de principios, inspirada en una versión elemental de la Teoría de la Dependencia; la eliminación de la inflación, la recuperación del aparato productivo o la racionalización del gasto público no encontraron allí ningún tratamiento adecuado, pero, en cambio, había una profusión de consignas radicales sin vinculación alguna con los dilemas cotidianos de la nación.

El gobierno de centro-izquierda, cuyos partidos integrantes entraban y salían del gabinete ministerial con una soltura de adolescentes, osciló hasta el fin entre una táctica de acercamiento a las posiciones sindicales (enfaticando las metas comunes y la bondad de un posible cogobierno) y una posición de severidad (subrayando las bases legales y constitucionales de su mandato y remitiéndose al programa de la coalición gubernamental). No se llegó a ningún acuerdo acerca de la «coparticipación predominante» de los sindicatos en las decisiones políticas (32), y más bien se dio una radicalización de las posturas sindicales, que coincidió con un empobrecimiento acelerado de la sociedad boliviana, una paulatina disolución de la autoridad gubernamental y un incremento considerable de la economía informal-delictiva. En septiembre de 1984 se llevó a cabo el VI Congreso de la Central Obrera Boliviana, el cual ratificó su llamada Tesis Política, es decir, la proclamación de un orden socialista como meta ulterior y normativa de sus esfuerzos y anhelos, confirmó el rechazo definitivo y total de la política económica del gobierno de centro-izquierda, postuló nuevamente la idea de que la COB sería la alternativa óptima de poder e insistió en que su Plan de Emergencia constituiría el único camino para salir de la crisis. El desarrollo del congreso fue turbulento; la elección de la nueva directiva de la COB recayó en los adversarios del gobierno

---

(31) «La COB entregará hoy programa de cogobierno ("Programa Nacional de Emergencia")», en *Presencia* del 9 de agosto de 1983, pág. 1; «Declaración de dirigentes sindicales: "Nos asiste un derecho histórico de participar en la conducción del país"», en *Presencia* del 26 de agosto de 1983, págs. 1 y 15; texto íntegro del «Plan de Emergencia», en *Cidre* (La Paz), año II, núms. 8/9, abril-mayo 1984, págs. 1-5.

(32) Cfr., entre otros, «"Informe al pueblo de Bolivia" (Documento del Ministerio de Informaciones)», en *Presencia* del 24 de abril de 1984; «Siles Zuazo asumirá plenitud de su misión de gobernar», en *Hoy* (La Paz) del 18 de mayo de 1984, pág. 1; «Demanda de COB es inaceptable constitucional y jurídicamente», en *Hoy* del 22 de mayo de 1984. El gobierno criticó una «deformada concepción de la democracia, en la que se excluye el concepto de obligaciones y deberes», la «demagogia irresponsable» y los «planteamientos irrealizables e ingenuos» de los sindicatos («Machicado: la intransigencia pone en riesgo la democracia», en *Presencia* del 17 de mayo de 1984, págs. 1 y 13), pero con su debilidad y vacilaciones coadyuvó al fortalecimiento del radicalismo sindical.

coaligados casualmente (y situados a la izquierda del Partido Comunista) (33). Se hizo patente, por otra parte, que la pérdida de importancia del sector de trabajadores mineros (y, en menor medida, del manufacturero-fabril) fue compensada por un aumento correspondiente del peso y de las actividades de los sindicatos de los sectores terciarios (especialmente los empleados públicos, de la banca y del Ministerio de Educación). Estos fueron los sindicatos que en aquel período propalaron las consignas más revolucionarias y presentaron las demandas salariales más exageradas, haciendo pasar sus intereses sectoriales por los intereses verdaderos y a largo plazo de toda la nación, aunque sin contar ni siquiera con el falaz argumento de la «centralidad» esgrimido por los mineros. Los docentes universitarios se distinguieron igualmente en este campo (34).

En aquella atmósfera de desorden generalizado, huelgas permanentes, inflación galopante y desintegración institucional, los empresarios privados perdieron la poca confianza que habían depositado en el gobierno al iniciarse el período de la Unidad Democrática y Popular; la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) lanzó, en septiembre de 1984, un exitoso ataque simultáneo a la «anarquía sindical» y a la «debilidad estatal», estableciendo un vínculo entre ambos factores en el sentido de que los dos habrían hecho todo lo posible «para desprestigiar el sistema democrático, para esterilizarlo y para dejarlo a merced de una suerte incierta» (35). El gobierno se agotó en llamamientos al diálogo, mientras que los empresarios, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los partidos de centro-derecha, que disponían de una reducida mayoría en el Parlamento, decidieron acortar el período presidencial y llamar a elecciones generales anticipadas. Ante esta eventualidad, la COB creyó llegado el momento para extorsionar al débil gobierno y obligarle a adoptar las medidas que ella consideraba imprescindibles (el «Plan de Emergencia»), y ordenó para tal fin una larga huelga general de carácter nacional,azonada con manifestaciones, amenazas y ofertas de paz. La dirigencia

---

(33) Cfr. «Informe del CEN de la COB y al VI Congreso», en *Presencia* del 9 de septiembre de 1984; *Ipe*, núm. 1067, vol. XXII, del 17 de septiembre de 1984, pág. 141; JORGE LAZARTE: «El VI Congreso de la COB», en *Presencia* del 5 de septiembre de 1984.

(34) Cfr. «Empleados públicos, bancarios y maestros, los más huelguistas», en *Presencia* del 27 de abril de 1984; «La COB respalda la patriótica actitud de los trabajadores del Banco Central de Bolivia», en *Presencia* del 4 de mayo de 1984; sobre los universitarios, cfr. *Ipe* del 9 de julio de 1984, vol. XXII, núm. 1057, pág. 102.

(35) FERNANDO ILLANES (presidente de la CEPB): «Gobierno y COB hicieron todo lo posible para esterilizar el sistema democrático», en *Hoy* del 24 de octubre de 1984; F. ILLANES: «Cartas a los empresarios» (30-IX-1984 y 20-X-1984)», en CEPB: *Pensamiento y acción de la empresa privada, 1982-1985*, La Paz, s.e., 1985, págs. 59 y 62.

sindical pidió al gobierno formalmente el cierre del Parlamento (36), rechazó cualquier tipo de pacto social, consideró un atrevimiento el querer incluir a la empresa privada en cualquier intento de diálogo y reiteró que la aplicación inmediata del «Plan de Emergencia» sería «la única base» para cualquier conversación (37).

En medio de los paros laborales y la descomposición social creciente, en noviembre de 1984 los partidos de oposición, con el apoyo de una parte considerable de la coalición gubernamental, llegaron a un acuerdo para adelantar las elecciones presidenciales y congresales mediante una ley pactada en el Parlamento, lo que significó una clara derrota política para el régimen de la Unidad Democrática y Popular e indirectamente para el movimiento sindical. Este no aceptó el convenio político y prosiguió la huelga general (38), pero el cansancio de las bases, el sentimiento colectivo de frustración, el descalabro político y la reacción adversa de varios sindicatos regionales obligaron a la dirección sindical a levantar la huelga sin haber conseguido ninguno de sus objetivos centrales.

## V

En febrero y marzo de 1985 la COB intentó recuperar algo de su impulso político anterior al empeorar aún más la situación económica del país y ascender el índice inflacionario a niveles astronómicos, combinando demandas salariales con designios políticos. Este ensayo de asumir un poder paralelo (39)

---

(36) A la conclusión de una enorme manifestación convocada por la COB el 12 de octubre de 1984, el secretario general de la misma decidió «exigir definiciones al presidente» sobre la aceptación inmediata del «Plan de Emergencia» y propuso «echar a patadas» a la calle a los miembros del Parlamento. Cfr. «Marcha obrera exigió definiciones a Siles», en *Hoy* del 13 de octubre de 1984.

(37) «COB pide que se cambien objetivos de la política económica tradicional», en *Hoy* del 13 de octubre de 1984; «La COB descarta "concertación" por falta de credibilidad en el gobierno», en *Presencia* del 24 de octubre de 1984; «COB atribuye el paro general a la "irresponsabilidad" del gobierno», en *Hoy* del 10 de noviembre de 1984; «La COB radicalizó sus medidas por la indolencia de los gobernantes», en *Hoy* del 20 de noviembre de 1984.

(38) «El paro de la COB tiende a agudizarse», en *Hoy* del 1 de diciembre de 1984; poco después: «COB levantó la huelga. Ampliado laboral aprobó las propuestas del gobierno», en *Hoy* del 5 de diciembre de 1984.

(39) Con respecto a las huelgas generales de marzo y septiembre de 1985 cfr. la obra exhaustiva de GODFREDO SANDOVAL: «La mil caras del movimiento social boliviano: De las jornadas de marzo a las jornadas de septiembre de 1985», en *Estado & Sociedad* (La Paz), vol. II, núm. 2, febrero de 1986, págs. 15-118; sobre la tesis del intento de establecer un poder paralelo cfr. *ibidem*, págs. 25 y sigs.

no tuvo, sin embargo, el menor éxito y después de otra huelga general indefinida —con actos de violencia de parte de mineros y campesinos— la COB tuvo que ceder y contentarse con modestísimos aumentos salariales (40).

La COB —y con ella importantes segmentos de las izquierdas— impugnaron la legitimidad, la oportunidad y la necesidad de elecciones generales (41), a la vista de que los partidos de izquierda iban a perderlas y que el nuevo gobierno de centro-derecha iría a dictar medidas económicas de corte neoliberal que afectarían tanto al nivel salarial como a las prácticas huelguísticas del sindicalismo. El nuevo gobierno de Víctor Paz Estensoro (a partir de agosto de 1985) promulgó efectivamente la nueva política económica el 29 de agosto de 1985, la cual fue calificada prontamente de «antipopular», «oligárquica», «genocida» y «violatoria de los derechos humanos, sindicales y políticos» (42) por la COB. La huelga general decretada por los sindicatos tuvo, empero, una repercusión mucho menor que en ocasiones anteriores; sectorial y regionalmente, el paro laboral fue muy restringido. El gobierno logró que una parte considerable de la opinión pública respaldase su posición de que la nueva política económica estaba de acuerdo a las leyes vigentes y que las últimas elecciones generales, en las cuales todos los partidos de izquierda habían sufrido una espectacular derrota, habrían concedido plena legitimidad al nuevo modelo económico neoliberal (43). La huelga, de por sí ya muy debilitada y con espíritu puramente defensivo (44), fue desbaratada por un solo acto de fuerza del gobierno, que dictó Estado de sitio y dispuso la detención de los dirigentes sindicales y de algunos políticos por dos semanas (45). Dada la vigencia de la cultura política del autoritarismo para todos los actores sociales inmersos en ella, una demostración de violencia tiene un

---

(40) Cfr. sobre todo *La COB ante la situación del país*, La Paz, COB, 1985, pág. 1; «COB rechaza el cogobierno y radicaliza huelga general», en *Presencia* del 19 de marzo de 1985; poco después, «COB levantó huelga general indefinida», en *Presencia* del 24 de marzo de 1985.

(41) «La COB impugnó la legitimidad de las elecciones nacionales», en *Presencia* del 9 de julio de 1985; «Los campesinos desconocen los comicios nacionales del domingo», en *Presencia* del 9 de julio de 1985.

(42) «Ampliado de la COB declaró "huelga general nacional"», en *Presencia* del 10 de septiembre de 1985, pág. 1.

(43) «El gobierno califica de política la huelga de la COB», en *Presencia* del 10 de septiembre de 1985, pág. 1.

(44) A pesar de algunos momentos dramáticos, cfr. «Comité Ejecutivo de la COB ingresó en huelga de hambre», en *Presencia* del 18 de septiembre de 1985, pág. 1.

(45) «Por "presiones arbitrarias e incitación pública", el gobierno dictó estado de sitio», en *Presencia* del 20 de septiembre de 1985, págs. 1 y 10; «Tienden a normalizarse las actividades en la industria», en *Presencia* del 21 de septiembre de 1985, pág. 1; cfr. LAZARTE: *Movimiento...*, op. cit. en nota 5, págs. 159 y sigs.

efecto mucho más intenso y claro que cualquier medida argumentativa. El movimiento sindical quedó descabezado y desmoralizado, mientras el gobierno ganó en prestigio político y ascendente moral. El potencial de negociación frente al gobierno y a los empresarios sufrió un irreparable descenso; igual deterioro manifestó la COB en su poder de convocatoria y en su cuota de legitimidad dentro de los medios obreros y campesinos. En sus negociaciones ulteriores con el gobierno, lo único que la COB logró fue la liberación de los detenidos; todas sus demandas políticas e institucionales y hasta las gremiales-salariales fueron desoídas por la Administración Pública, sin que ésto tuviese consecuencias negativas en el frente laboral (46).

El radicalismo político de la COB y su intento de establecer una fuente alternativa de poder popular han llevado a la dispersión de sus objetivos primordiales, a una imagen distorsionada del mundo moderno y de la sociedad boliviana y a una descomposición de su identidad colectiva y, por tanto, a un quebrantamiento de su rol como sujeto político de primer orden. El retorno a la práctica de modestas demandas salariales no quiere decir, sin embargo, que haya renunciado a la herencia del autoritarismo; el movimiento sindical boliviano debe todavía recorrer un largo trecho para percibir que sus contendientes representan intereses tan legítimos como los propios y para concertar con ellos mediante la vía pacífica y pragmática acuerdos de ámbito limitado, pero útiles para el paulatino desarrollo de una sociedad democrática.

---

(46) «COB resolvió suspensión de todas las huelgas en todo el país», en *Presencia* del 3 de octubre de 1985, págs. 1 y 15. Intentos de resistencia al nuevo modelo económico, preconizados por partidos de izquierda, no tuvieron ninguna consecuencia práctica (cfr. «Partidos de la izquierda convocan a la resistencia», en *Hoy* del 21 de septiembre de 1985, pág. 4).